



Asamblea General

Distr. general
3 de septiembre de 2012

Español solamente

Consejo de Derechos Humanos

21º período de sesiones

Tema 3 del programa

**Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluido
el derecho al desarrollo**

Exposición escrita* presentada por los Permanent Assembly for Human Rights, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[23 de agosto de 2012]

* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en los idiomas tal como ha sido recibida de la organización no gubernamental.

Derechos humanos y corporaciones

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) saluda la creación de un Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, mediante Resolución del Consejo de Derechos Humanos Nro. 17/4 de 16 de junio de 2011. En el mismo sentido, expresa satisfacción por la conformación efectiva del Grupo de Trabajo y su incansable labor en procura de la difusión y promoción de los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos”.

Ahora bien, desea manifestar, además, su preocupación por la situación de los derechos humanos afectados por el accionar de empresas transnacionales y otras empresas en el territorio de la República Argentina. Cabe destacar que existen actualmente un sinnúmero de conflictos protagonizados por empresas y diversos grupos que denuncian las más variadas violaciones a sus derechos humanos.

Vale señalar que los conflictos territoriales y medioambientales entre empresas petroleras, mineras, sojeras, pasteras, entre otras, y pueblos indígenas, campesinos, asambleas vecinales, pobladores de ciudades y municipios en el Interior del país, entre otros grupos, se presentan como una constante en diversos puntos geográficos del territorio nacional. Famatina, Andalgalá, Tinogasta, resultan tan solo casos testigos de lo que se presenta como una realidad insoslayable.

Abundando, es menester señalar que en la ciudad de Famatina (La Rioja), desde aproximadamente el año 2004, se llevan a cabo medidas de protesta ciudadana en reacción frente al desarrollo de proyectos de minería a cielo abierto, contaminantes y que afectan negativamente los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano y equilibrado de la población. Sin perjuicio de ello, específicamente, desde agosto de 2011 los habitantes de Famatina llevan adelante una intensa actividad de protesta y rechazo a la instalación de la minera canadiense Osisko Mining Corporation que pretende establecer una mina a cielo abierto para la extracción de oro, cobre y plata en el Cerro que da nombre a la ciudad. El emprendimiento cuenta con el apoyo incondicional del Gobierno de La Rioja. Es más, desde hace ocho meses el Gobierno Municipal no recibe fondos del Gobierno Provincial a raíz, justamente, de su adhesión al reclamo popular. A su vez, en reiteradas ocasiones se ha desplegado un accionar represivo injustificado sobre los vecinos reunidos en manifestación pacífica, con consecuencias reprochables. Por otro lado, mediante el presente, la APDH denuncia la actitud discriminatoria de la empresa canadiense Osisko Mining Corporation, que pretende iniciar el proyecto ignorando los reclamos de los pobladores de Famatina, en tanto en su país de origen mantiene desde 2008 una política de consultas comunitarias en su proyecto Malartic, también de explotación aurífera. Ignorando así la legislación vigente en Argentina relativa al acceso a la información pública como figura en Decreto 1172/2003 y en diversos tratados internacionales de derechos humanos vigentes en el país.

Similar situación acontece en las ciudades de Andalgalá y Tinogasta (Catamarca). La protesta social producto de emprendimientos mineros a cielo abierto constituye el objeto del reclamo y la movilización popular. En juego, nuevamente, los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano y equilibrado. La protesta es reprimida severamente y hay denuncias de persecuciones, incluso a profesionales involucrados en el reclamo popular. En Andalgalá, el conflicto lo protagonizan, principalmente, la empresa Minera Alumbrera (gerenciada por Xstrata Plc -basada en Suiza-, con el 50% del paquete accionario, y las empresas canadienses Goldcorp Inc y Yamana Gold que cuentan con el 37,5% y el 12,5% respectivamente), por un lado, y la Asamblea de Vecinos de Andalgalá, por el otro. En Tinogasta, a su vez, asume un rol relevante la organización de los vecinos en el marco de la Asamblea Ciudadana de Tinogasta. La APDH expresa su preocupación atento a que durante 2012, de acuerdo con investigaciones periodísticas, han tenido lugar en

la provincia de Catamarca seis represiones en respuesta a protestas sociales contra la megaminería. 56 activistas fueron obligados por la policía a dejar la provincia. Además, la APDH advierte sobre la existencia de grupos de choque particulares denominados “pro mineros”, que cuentan con impunidad y la aquiescencia del Estado Provincial.

Los hechos descriptos se repiten de forma análoga en las demás provincias cordilleranas. Ejemplo paradigmático es San Juan, en la cual la megaminería y demás emprendimientos extractivos generan lamentablemente violaciones a los derechos humanos de sus habitantes, en tanto que la contaminación, el uso indiscriminado del agua y la pauperización de las condiciones de la tierra tienen correlato nocivo en derechos básicos como son la salud, la alimentación y el medio ambiente sano.

Los conflictos entre petroleras y mineras, por un lado, y pueblos indígenas, por el otro, revisten particular importancia en provincias como Jujuy y Neuquén. Asimismo, en provincias como Santiago del Estero, el conflicto entre empresarios sojeros y comunidades indígenas y campesinas se caracteriza por índices de violencia verdaderamente alarmantes: en los últimos dos años, resultaron muertos dos campesinos (Ely Juárez y Christian Ferreyra, ambos miembros del MOCASE- Vía Campesina- la primera, muerta frente a una topadora; el segundo a manos de sicarios de un terrateniente). Además, en Santiago del Estero la persecución policial y judicial ha llevado a la criminalización de la protesta social, hecho que la APDH ha denunciado en diversas instancias internacionales.

La violación de la normativa y los estándares internacionales en materia de protección del medio ambiente y de derechos humanos como la salud y la alimentación por las empresas transnacionales y otras empresas se termina concretando con la aquiescencia e inacción de los gobiernos provinciales, y en ocasiones del mismo gobierno nacional. El Estado Argentino es responsable de las violaciones a los derechos humanos de poblaciones rurales y urbanas- incluyendo indígenas y campesinas- producidas en virtud de las acciones y omisiones de las empresas. Asimismo, cabe poner de relieve que en reiterados casos las empresas no generan beneficios para las poblaciones que habitan los territorios en los cuales desarrollan su actividad; por el contrario, en la lógica del modelo económico de desarrollo extractivo, generan perjuicios, a saber: disminución de las riquezas y recursos naturales, contaminación ambiental, daños en la salud de las personas, etc.

Por ello, la APDH insta al Estado Argentino a que adecue su accionar a Derecho y proceda a dar efectiva aplicación a la normativa nacional e internacional que rige en materia de protección del medio ambiente y de derechos como la salud y la alimentación, interpretada de conformidad con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Asimismo, insta al Estado a sancionar a las empresas que no garanticen el desarrollo de una actividad que cumpla con las normas y reglamentos previamente referidos.
